



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

**Demandante:** Consorcio Reforestar  
**Demandado:** Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA  
**Radicación:** 15001 3333 004 **2018 00112 00**  
**Medio de Control:** Reparación Directa

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, tal como sigue:

Mediante apoderada judicial, el **Consorcio Reforestar** —integrado por SERPROSALUD LTDA, identificado con Nit. 804.006665-1; Ángel Roa Hernández, con Nit. 13.831.422-8 y Yesid Ávila Torres, con Nit. 74.372.236-6—, en ejercicio del medio de control de reparación directa, promovió demanda contra la **Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA**, con el fin de que sea declarada *“la responsabilidad patrimonial de la parte convocada, por la no liquidación y pago del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CEO 2012-0003”*, y como consecuencia de dicha declaración, que sea condenada al pago de la suma de \$294.635.507, por concepto de *“liquidación”* del contrato (f. 2).

Como soporte de dichas pretensiones, el demandante expuso el siguiente soporte fáctico, que el Despacho resume de la siguiente manera:

- Que el día 16 de mayo de 2012, suscribió el contrato de ejecución de obra COE 2012-003 con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, cuyo objeto fue el *“Establecimiento y mantenimiento de bosque protector – productor en zonas de importancia hídrica de la cuenca alta del Río Chicamocha en los municipios de Cóbbita, Siachoque, Sotaquirá, Toca y Tuta del departamento de Boyacá”*, con una duración de cinco (5) meses.
- Que el día 4 de junio de 2012, suscribió acta de inicio de dicho contrato.
- Que el 2 de noviembre de 2012, el contrato fue objeto de ampliación en el periodo de ejecución, y se extendió su duración a diez (10) meses.
- Que el 8 de enero de 2013, el contrato fue suspendido por el término de 77 días, hasta el 26 de marzo de 2013.
- Que el 4 de abril de 2013, el contrato se suspendió nuevamente, hasta el 30 de abril de ese mismo año.
- Que el 28 de julio de 2013, fue suscrita el acta de terminación del contrato.
- Que a pesar de múltiples requerimientos a la entidad contratante, hasta la fecha de radicación de la demanda, no se ha realizado la liquidación del contrato, circunstancia que ha causado graves perjuicios a la parte demandante.

Con sustento en lo anterior, el Despacho advierte que la causa *petendi* es propia del medio de control de controversias contractuales, y no del de reparación directa, porque la parte demandante persigue la liquidación judicial de un contrato estatal. Así las cosas, puede concluirse la indebida escogencia del medio de control, porque las omisiones que tienen relación con la liquidación del contrato, precisamente, deben ventilarse a través de las controversias contractuales, y no de la reparación directa.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha puntualizado lo siguiente:

***“La acción contractual procede cuando la controversia gira en torno al contrato, por actos, hechos u omisiones que tienen que ver con la celebración, ejecución o liquidación, de modo que corresponda establecer el alcance de lo convenido y la conducta de los extremos contractuales durante su ejecución. Sin perjuicio que la misma acción procede frente a los actos contractuales proferidos por la entidad estatal contratante en las etapas de ejecución y liquidación. Ahora, si la inconformidad tiene que ver con prestaciones cumplidas más allá de lo acordado o ajenas al acuerdo, se ha considerado que lo procedente tiene que ver con reclamar por el daño causado haciendo uso de la acción de reparación directa, sin que el ejercicio de la acción contractual impida decidir de fondo<sup>1</sup>.”<sup>2</sup>***  
(Negrilla fuera de texto).

Ahora bien, al margen del medio de control ejercido, conviene señalar que en virtud del principio *iura novit curia*, el juez está obligado a dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, e impartir el trámite procesal que corresponda, aun cuando se hubiere indicado una vía procesal diferente (art. 171 CPACA), y asegurar con ello el acceso a la administración de justicia.

Como el Despacho se encuentra facultado para interpretar el libelo demandatorio, con el debido respeto a la causa *petendi* y las pretensiones, procede a examinar la demanda a la luz del medio de control de controversias contractuales, al establecer que la inconformidad de la demanda no tiene relación con el daño derivado del cumplimiento de prestaciones más allá de lo pactado o ajenas al contrato estatal, que habiliten el ejercicio de la acción de reparación directa.

Con relación al medio de control de controversias contractuales, el artículo 141 del CPACA establece:

“(…)

*El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la Ley”*

(…)

A su turno, el término de caducidad del medio de control en cita se encuentra regulado en el numeral 2°, literal j), numeral v), así:

***“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:***

<sup>1</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera del Consejo de Estado. M.P. Jaime Orlando Santofimio, expediente 24897.

<sup>2</sup> CE. SCA. SIII – Subsección B, Consejera ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 08001-23-31-000-1999-02042-01(36245)

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

(...)

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;...”

Descendiendo al caso concreto, se advierte que el contrato objeto de esta controversia, en la cláusula décima estableció lo siguiente:

“CLAUSULA DECIMA. La liquidación se hará de común acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término de ejecución del contrato...” (f. 31).

Así las cosas, para efecto de determinar la fecha a partir de la cual debe contabilizarse el término de caducidad, debe atenderse el vencimiento del término de ejecución del contrato, el cual tuvo lugar el 28 de julio de 2013, según acta de terminación de contrato obrante a folio 35.

Por lo tanto, el plazo de cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término de ejecución del contrato para liquidación bilateral del contrato venció el 28 de noviembre de 2013, y el de liquidación unilateral, finalizó dos (2) meses después, esto es, el 28 de enero de 2014; fecha a partir de la cual debe iniciarse el conteo del término de caducidad del medio de control ya referenciado.

Lo anterior, permite concluir que los dos (2) años con que contaba el demandante para presentar la demanda con el objeto de que se produzca la liquidación judicial del “contrato de ejecución de obra CEO 2012-0003” contra CORPOBOYACA, se surtieron entre el 28 de enero de 2014 y el 28 de enero del año 2016, —sin que pueda predicarse la suspensión del término de caducidad por presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, en tanto la misma fue radicada el 27 de noviembre de 2017 (f. 14)—; no obstante, la demanda tan solo fue radicada el día 29 de mayo de 2018 (fl. 79), de tal suerte que operó el fenómeno de la caducidad, y ello impone el rechazo de la demanda, según lo dispuesto en el artículo 169 del CPACA.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

**PRIMERO.- Rechazar** la demanda formulada por el CONSORCIO REFORESTAR, —integrado por SERPROSALUD LTDA, identificado con Nit. 804.006665-1; Ángel Roa Hernández, con Nit. 13.831.422-8 y Yesid Ávila Torres, con Nit. 74.372.236-6—, contra de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, por caducidad del medio

de control de controversias contractuales, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

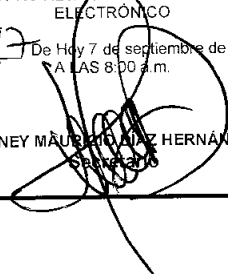
**SEGUNDO:** En firme este auto, entregar los anexos sin necesidad de desglose, y archivar el expediente, con las constancias y anotaciones a que haya lugar.

**TERCERO.-** Reconocer personería a la abogada Liliana Alejandra González Bautista, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.048.231 y T.P. N° 136.533 del C.S.J., como apoderada de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 1 del expediente.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
JUEZ

3  
Casco

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO</p> <p>N° 43 De Hoy 7 de septiembre de 2018 A LAS 8:00 a.m.</p> <p> FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario</p>
--